

VII Asamblea Federal de Izquierda Unida

Buscando la salida del laberinto y los “caracóles” ibéricos

G. Buster

La VII Asamblea Federal de Izquierda Unida (IU), celebrada en Madrid del 19 al 21 de diciembre, ha supuesto ante todo la afirmación de una estrategia política para derrotar al Partido Popular anclada en la izquierda. La existencia de esta estrategia es más necesaria que nunca cuando después de dos períodos legislativos con gobiernos presididos por Aznar - que han supuesto no solo una consolidación de las políticas más neoliberales y centralistas, sino el alineamiento sin condiciones del Estado Español con la Administración Bush y una grave erosión de las libertades democráticas- la derecha amenaza con una tercera victoria en las elecciones legislativas de marzo con Rajoy como candidato.

¿Cómo es posible esta situación de hegemonía de la derecha más centralista y neoliberal en el Estado español? Y ello a pesar de la mayor oleada de movilizaciones sociales que ha tenido lugar desde el final del franquismo (contra el Banco Mundial, Sintel, contra la presidencia española de la UE, contra el Plan Hidrológico Nacional, contra la reforma educativa, contra la guerra en Iraq y el 15F, la huelga general del 20J, contra el desastre ecológico del “Prestige”, Puertollano, la participación en el FSM y el FSE y la defensa de los derechos democráticos del pueblo vasco...). Sin entender el marco social y político y las tareas a las que se ve confrontada la izquierda en general, y la izquierda alternativa en particular, no es posible comprender el significado de la VII Asamblea de IU.

De hecho esta situación de hegemonía de la derecha, si bien tiene raíces profundas, ha sido el resultado de una recomposición política del PP y una derrota del PSOE tras las elecciones municipales del 25 de mayo del 2003. El PP ha conseguido así limitar la sedimentación electoral a la izquierda de la extensa movilización social que, aunque de manera desigual, comenzaron a recoger las encuestas de opinión tras la huelga general del 20J del 2002, volviéndola a desviar en parte hacia la abstención. El 25M el PSOE obtuvo 700.000 votos más, superando al PP en 100.000 votos. Estas cifras hay que compararlas con los 43.000 votos de ventaja del PP en las anteriores elecciones municipales y con los 300.000 con los que ganó las últimas elecciones generales. Según las encuestas publicadas en mayo del 2003, el PSOE hubiera podido ganar entonces unas elecciones generales con un 2,5% más de votos que el PP, pero no obtener una mayoría absoluta. La derecha española había perdido la mayoría social, pero salía casi intacta por lo que se refiere a su poder institucional y se mantenía unida en un solo bloque político (de cuyo apoyo dependía además la derecha catalana para mantener en la Generalitat a CiU) frente a una oposición extremadamente dividida.

Zapatero y el PSOE fueron incapaces de tomar la iniciativa política y plantear una alternativa al PP que fuera más allá de un estricto bipartidismo basado en prometer una gestión “amable” y de “centro” de las mismas políticas neoliberales y centralistas de la derecha. Su subordinación a la derecha siguió siendo especialmente dramática en el “pacto antiterrorista”, convertido por el PP en el ariete de la polarización política entorno a la cuestión vasca y la propuesta Ibarretxe. Su miedo a una reforma constitucional, una anunciada política fiscal regresiva y su continuo enfrentamiento con la izquierda nacionalista en Galicia (BNG) impedían que se llegase incluso a plantear una política de alianzas contra el PP.

Apoyándose en su enorme poder institucional y mediático y en la movilización real de la base social de la derecha, Aznar preparó el acoso y derribo de la posible alternancia bipartidista del PSOE a través del golpe de efecto de los escándalo de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de Marbella, en los que la compra de diputados y concejales del PSOE no solo frenó en seco la posible alternancia bipartidista, sino que colocó en primer plano los recuerdos y la realidad de la corrupción del “Felipismo”, que Zapatero, evidentemente, no había sabido superar. Las encuestas de opinión –por si hacia falta otra constatación que la pérdida de votos del PSOE en las segundas elecciones autonómicas de Madrid- colocaron a finales de octubre al PP cuatro puntos por encima del PSOE y un sector del electorado de izquierdas volvía a refugiarse en el abstencionismo.

El éxito inmediato de la contraofensiva de Aznar –que le permitió resolver de paso sin problemas la cuestión sucesoria en el PP designando a Rajoy- obligó al Gobierno Vasco a aumentar la prudencia ante el bloqueo de cualquier evolución del PSOE en su actitud ante el Plan Ibarretxe, de la que depende en buena parte sus posibilidades de éxito. El siguiente movimiento de Aznar fue dirigir toda su artillería contra Maragall, ERC y su propuesta de reforma del estatuto catalán ante las elecciones de noviembre en Catalunya. La victoria de Maragall podía no solo desalojar a CiU de la Generalitat -privando al PP de su principal aliado en caso de no revalidar la mayoría absoluta en las elecciones generales de marzo-, sino que además ofrecía un modelo de alternativa distinto al del bipartidismo de Zapatero. Maragall jugaba a recoger el voto efecto de las enormes movilizaciones sociales en Catalunya de los últimos años, no tanto directamente como a través de ERC e ICV-EUiA, en una alianza de la izquierda plural que plantease además la reforma del estatuto, condición para una mayor capacidad de gestión fiscal y gasto social.

La formación del gobierno de izquierdas en Catalunya, a pesar de todas las maniobras de CiU y del PP, ha cambiado el panorama político frenando la contraofensiva de Aznar y ha colocado en primer plano una alternativa política para derrotar a Rajoy en marzo que es más realista en cuanto a sus posibilidades de éxito que el bipartidismo de Zapatero. Pero es que además se sitúa claramente a la izquierda, con una política de alianzas plural que tiene que apoyarse en la presión social y en el fin del mito de la inmutabilidad de los estatutos de autonomía y, finalmente, la Constitución, la madre de todos los pactos post-franquistas. Evidentemente, la contraestrategia del PP y de Rajoy se basa ahora en enfrentar la alternativa de la izquierda plural catalana al bipartidismo de Zapatero, mantener atado a este último al yugo de los “pactos de estado” y agitar el espantajo de la desintegración del Estado español para mantener movilizada en un solo bloque a su base social. Pero a pesar de la estupefacción de Zapatero y de su equipo, de las presiones internas de las distintas familias políticas del PSOE y de los grupos económicos y mediáticos que le apoyan para mantenerlo en el estricto bipartidismo, las cosas empezaban a estar cada vez más a claras a finales de tan tenebroso año. Mientras Bono e Ibarra seguían en su línea habitual en el paradigma virtual del “centro españolista”, Chavez se desmarcaba y comenzaba a defender, milagro de los tiempos, una “alianza catalano-andaluza” para reformar los estatutos de autonomía. Para Zapatero ya no se trataba de pasar, como en octubre, de la “oposición útil al cambio sereno y responsable”, en una fórmula digna de Groucho Marx, sino en ir hacia la derrota (y la jubilación) por la vía luminosa del bipartidismo o arriesgarse a extender al resto del Estado, aunque fuese parcialmente, la fórmula catalana de la izquierda plural, con el riesgo de abrir la caja de pandora de la reforma constitucional.

IU con esos pelos

IU llegaba a la nueva coyuntura política a finales del 2003 y a su VII Asamblea Federal por los pelos y a medio peinar, pero llegaba. La VI Asamblea Federal, celebrada hacia tres años, la había recogido de la UVI tras la “era Anguita” en la que el fracaso de la política de *sorpasso* del PSOE, la escisión de Nueva Izquierda y la ruptura con ICV había terminado con el sorprendente y súbito giro de 180 grados de Frutos y la alianza electoral sin programa con el PSOE. IU se había colocado en su resultado electoral más bajo, en una caída continua desde 1995 que amenazaba con convertirla en una fuerza extraparlamentaria y en provocar su explosión.

Aunque había pocas dudas sobre el estado pre-agónico del enfermo, los diagnósticos de cómo tratarlo variaban considerablemente. Para Frutos, secretario general del PCE y último responsable de IU tras el infarto de Anguita, el remedio era un giro radical en el funcionamiento de IU que asegurase una línea política única, definida por un PCE hegemónico, la condena de la línea de Madrazo en Ezker Batua en nombre de la defensa del “constitucionalismo español” y una política subordinada de alianzas con el PSOE que aceptase la correlación de fuerzas electoral en la izquierda, sin ponerla en cuestión. Frutos consiguió aliar al aparato central del PCE con la dirección mayoritaria del PC e IU en Andalucía y Madrid (Alcaraz y Perez) y obtuvo el 39,38% de los votos. Nines Maestro, por el contrario, consideró que había que mantener el giro a la izquierda iniciado con la política de *sorpasso*, eliminando ambigüedades y entroncandola en los movimientos sociales antiglobalización, en una lucha abierta por su dirección política que cambiase la naturaleza misma de IU y la transformase en una organización anticapitalista. Junto con la CUT andaluza, sectores del PCE y organizaciones trotskistas como CEA o el PRT, obtuvo el 18,02% de los votos, que se transformarían poco después en la Corriente Roja. El bloque que apoyo a Gaspar Llamazares era mucho más heterogéneo, pero estaba unido por la voluntad de defender la soberanía de IU y de sus federaciones frente a los intentos hegemónicos de la dirección del PCE y conservar la organización como un instrumento abierto, plural y democrático al servicio de los movimientos sociales alternativos. Sus señas de identidad era la defensa de la autonomía de Ezker Batua para definir su propia política de alianzas con el nacionalismo democrático en Euskadi y la promesa de discutir de todo sin tabús en un horizonte post-PCE. La lista de Llamazares obtuvo el 42,59% de los votos y la Coordinación General por un solo voto en el nuevo Consejo Político Federal /1.

De hecho, Llamazares estaba en minoría y solo había llegado a la Coordinación General por la catástrofe electoral que había acompañado la alianza de Frutos con el PSOE y que había dividido profundamente al PCE, haciendo imposible una coalición, incluso temporal, de su corriente con la de Nines Maestro. Esta temía con razón acabar siendo víctima de los escasos hábitos democráticos internos del aparato del PCE (de los que ya había pruebas en Madrid y otras federaciones de IU). Su debilidad le obligó a un enorme esfuerzo, apoyado en un equipo muy reducido, para hacerse con el control de la dirección política del grupo parlamentario (nunca lo consiguió con el grupo en el Parlamento Europeo), de la Presidencia y, en menor medida del Consejo Político Federal –los tres principales organismos centrales de IU- en medio de una agobiante crisis financiera por la deuda heredada. Aunque se comenzaron a acumular elementos de una nueva orientación política -como el deseo de abrirse a los movimientos sociales alternativos, la recomposición de las relaciones con los sindicatos y las izquierdas nacionalistas, el replanteamiento de las imprescindibles

relaciones con el PSOE desde un proyecto autónomo no subordinado-, la propia debilidad de IU, la continua tensión en la dirección con el aparato del PCE y el extremo fraccionalismo en las federaciones bloquearon cualquier avance real hasta finales de la presidencia española de la UE, en junio del 2002.

Llamazares y su equipo apoyaron la entrada de EB en el Gobierno Vasco, para acompañarla a continuación de todo tipo de ambigüedades y señales contradictorias, bajo la presión de un PCE que exigía la defensa del “constitucionalismo español” y argüía que la política de Madrazo era la causa esencial de la caída de voto de IU en el resto del Estado. Llamazares asistió personalmente a todas las manifestaciones y actos del movimiento antiglobalización que pudo y se convirtió en la principal voz crítica contra el PP en el Parlamento. Pero IU como tal no cumplió un papel significativo en la organización e impulsión del movimiento, porque las diferentes fracciones y corrientes de IU intervinieron autónomamente en su propio nombre para construirse directamente. El apoyo de IU a la huelga general del 20J tuvo características similares y el intento de diálogo con las direcciones de UGT y CC OO se vio limitado por el completo posicionamiento de ambas a favor del bipartidismo, porque solo aspiraban a reanudar la política de pactos sociales con un posible gobierno del PSOE ante la imposición por decreto de la reforma laboral del PP.

En la política de fraccionalismo que corroía a IU como proyecto, la presión más fuerte era sin duda la del aparato del PCE, porque en su seno -como demostró su XVI Congreso- la correlación de fuerzas de los distintos sectores era la inversa a la de IU y la corriente de Llamazares solo obtuvo el 20% (frente al 59% de Frutos y el 21% de Nines Maestro)/2. Llamazares solo podía recomponer el funcionamiento organizativo de IU, más allá de su dirección central, apoyándose en los sectores independientes y de origen distinto al PCE, que suponían ya casi el 50% de la afiliación de IU. Pero encontró escaso eco porque, por un lado, optó por la fórmula de situarse por encima de las luchas fraccionales en una posición de arbitro y, por otro, los continuos tiros y aflojas con la dirección del PCE limitaron la credibilidad de un discurso alternativo lleno de ambigüedades que no compartían además buena parte de las direcciones de las federaciones. Los sectores organizados más alternativos que lo habían apoyado en la VI Asamblea comenzaron a construir su propio perfil independiente en las movilizaciones.

Se iba extendiendo la impresión de que una caída electoral fuerte de IU en las municipales podía simplemente implicar su explosión, entre otras cosas porque un número importante de militantes del PCE se preguntaban abiertamente “¿para que sirve IU?” y se diseñaban varios proyectos de “refundación comunista” eurocomunistas, cossutistas y bertinottianos, buscando en Italia soluciones precocinadas, dado que las recetas francesas simplemente se habían agriado tras la derrota de la izquierda plural francesa y de su gestión neoliberal. El propio sustrato de la defensa de una IU abierta, plural y democrática se estaba erosionando rápidamente, como puso de manifiesto la confección de las listas municipales en Madrid, que se convirtió en una merienda de aparato (con el trasfondo de la mayor operación especulativa inmobiliaria en Europa ligada a la reubicación del Real Madrid y cuyos ramales llegarían hasta el escándalo posterior de la Asamblea de Madrid). Para no hablar de otras federaciones, donde las cosas se arreglaban poniendo en la calle a las minorías críticas, como en Rioja o en Almería.

El giro

¿Qué salvo a IU de si misma a finales del 2002? Esencialmente la presión exterior de una segunda fase de movilizaciones, que llegaron a su punto más álgido en la campaña contra la guerra de Iraq. Millones de ciudadanos se manifestaron en la calle y fueron apoyados por el 90% de la opinión pública contra un Aznar lanzado a toque de degüello a la polarización política antiterrorista, convertida en ontología unívoca del mundo mundial, de Vitoria a Bagdad.

La movilización fue tan grande que simplemente desbordó a todas las fracciones de IU, muchas de las cuales echaron el resto en la campaña con toda generosidad. Pero su dimensión organizativa independiente era insuficiente para hacerlas jugar un papel de referente a nivel estatal, como había sido en parte durante la campaña contra la presidencia española de la UE. Y el voluntarismo vanguardista de algunas se veía desbordado por coordinaciones amplias y autónomas que, como la Plataforma de la Cultura contra la Guerra o Aturem la Guerra, necesitaban un referente político parlamentario, dado el carácter de la confrontación, además de la convocatoria del 15 F lanzada por el FSE. Llamazares se tiró al ruedo sin dudarlo dos veces y se convirtió en la voz y la cara de la oposición más dura en el Parlamento, arrastrando a un PSOE que no tuvo más remedio que seguirle como pudo. Hacia falta algo como IU a la izquierda del PSOE en el terreno político y el movimiento social se encargó de definir sus fronteras como un polo de confrontación genuino en la polarización alimentada por Aznar. Un papel que el PSOE no podía cumplir simbólicamente por mucho que se empeñase, porque había metido a España en la OTAN y había apoyado la primera guerra de Iraq, lo que de entrada hacía cuanto menos sospechosa su nueva radicalidad en defensa del derecho internacional. La política de polarización extrema de Aznar pretendía alcanzar la tercera victoria del PP a base de erosionar la credibilidad o lo deseable de una mera alternancia para obligar a la gente a no tener otra opción que una alternativa, que la calificación de “social-comunista” colocaba, unida al envite nacionalista, en el fantasma de la guerra civil (que la negativa del PP a condenar la insurrección de Franco bastaba para recordar a los olvidadizos quién había ganado).

¿Qué credibilidad tiene hoy semejante discurso? Probablemente no demasiada, más allá de ciertos sectores de la derecha, y de ahí su subordinación a media bronca al discurso del “constitucionalismo patriótico y antiterrorista” frente al federalismo o los nacionalismos democráticos de PNV-EA y ERC (dejando de momento de lado al BNG para que se despedazase con el PSOE en Galicia por ver quien era la alternancia a Fraga, incapaces de organizar una auténtica alternativa a pesar de la impresionante movilización de Nunca Más). A medida que Aznar iba convirtiendo al PP en más de si mismo y a Rajoy en su alternancia, ocupaba todo el espacio del régimen constitucional de la transición en su 25 aniversario y hacia de la reforma de la Constitución, a través de la reforma de los estatutos de autonomía, la más moderada y, por tanto, la más factible de todas las alternativas. Llamazares, colocado en ese campo por la presión de las movilizaciones, el apoyo –con todos los peros, pero al final apoyo- a EB y su opción federalista se encontró al frente de una IU justificada y necesaria. Su recurso a reivindicar la Constitución a reformar tanto en el modelo de estado como en su contenido social, no era tanto un “reflejo carrillista” sino el miedo a perder credibilidad como alternativa posible y real y ser empujado por Aznar y la “brunete mediática” más allá, en el apetecible pero sin duda utópico campo, de una ruptura republicana en seis meses /3. Para el bipartidismo radicalizado de Zapatero del “cambio sereno y responsable” era demasiado atraganto, porque implicaba a Ibarretxe como guinda. Aunque tímidamente empezó a apuntarse también a una reforma constitucional “light” mediante la reforma del Senado (sin duda para hacerlo tan “útil” como su oposición) y a mirar de reojo insistentemente a Maragall, su última esperanza

antes de las generales tras el desastre de Madrid, a pesar de las acusaciones del PP de que ello le despistaba cuando Aznar le repetía una vez más machaconamente la lección del constitucionalismo antiterrorista.

La formación del gobierno tripartido de izquierdas y catalanista en la Generalitat, como se ha señalado antes, tradujo de alguna manera en el terreno institucional los cambios en la correlación de fuerzas a nivel social que se estaban acumulando en los dos últimos años. Sus consecuencias políticas fueron inmediatamente perceptibles cuando cinco gobiernos autónomos más plantearon también, como el vasco y el catalán, la necesidad de reformar sus estatutos (incluyendo a Madrid y Valencia, del PP, y Canarias, gobernada por un aliado incondicional del Gobierno como es CC). El enfrentamiento iba a producirse en los próximos meses en el campo escogido por el PP, entorno a la cuestión nacional, como no podía ser de otra manera dada su hegemonía. Pero la movilización y sus primeras consecuencias electorales estaban cambiando los términos del enfrentamiento. La cuestión ahora era si las reformas acumuladas de los estatutos de autonomía (con sus competencias y respaldos fiscales) eran contenibles en el actual marco constitucional o si podían desbordarlo, a partir de la presión inicial de Euskadi y Catalunya, y plantear una reforma de la Constitución que abriese una segunda transición. Calderas, cuando comenzó a filtrar el programa electoral del PSOE a comienzos de enero, aseguró que su partido se mantendría en el marco constitucional y aceptaría negociar todas las reformas menos la propuesta por Ibarretxe, y volvió a definir su programa como una alternancia dentro del bipartidismo constitucional. El campo de la alternativa, es decir de luchar por una reforma de los estatutos que desembocase en una reforma constitucional, quedaba en manos de IU a nivel estatal, con aliados interesados en ERC y ICV en Catalunya y PNV-EA en Euskadi. Para la izquierda alternativa el desafío era empujar lo más lejos este choque sobre el modelo de estado y llenarlo de contenido social.

La VII Asamblea

La preparación de la Asamblea en IU, dividida en corrientes y fracciones, no fue capaz de contextualizar el reto ante el que se encontraba. Por un lado, la debilidad del núcleo de dirección alrededor de Llamazares hizo que cediese la elaboración de las Tesis políticas a una comisión de redacción en la que intentó incluir a las distintas corrientes, mientras que se reservaba un derecho de veto final, al que también se apuntó el aparato del PCE con Frutos y Alcaraz, como condición para llegar a una lista unitaria en la Asamblea. A pesar de ello, el protagonismo de la redacción de las Tesis correspondió en buena parte, a pesar de las rebajas posteriores, a quienes después encabezarían la Corriente Alternativa (que además, a través del Espacio Alternativo, presentarían una serie de enmiendas en temas clave como la cuestión nacional, la constitución europea o la resistencia sindical). El equipo de Llamazares se reservó la redacción del informe político, donde intentó definir la nueva situación como la necesidad de abrir un nuevo ciclo político, a partir de un proyecto autónomo y de un reequilibrio en el seno de la izquierda, con el horizonte de un gobierno de la izquierda plural a nivel estatal, apoyándose en las movilizaciones sociales y en una política de alianzas amplia para reforzar a IU, que recogiese todo el abanico de fuerzas a la izquierda del PSOE /4.

La crisis y ruptura de la Corriente Roja, resultado de su orientación vanguardista en los movimientos en el período anterior y el liderazgo personalizado de Nines Maestro, condujo a la presentación de dos textos alternativos firmados por la propia Corriente Roja y por la Plataforma de Izquierdas (que recogía a lo principal de sus fuerzas en

Madrid). La posición de partida de ambos era que IU seguía hundiéndose en un giro a la derecha, subordinándose al PSOE, incapaz de construir una alternativa anticapitalista.

Las tesis sobre organización y estatutos, que fueron redactadas directamente por la “nueva mayoría” surgida del pacto entre el sector Llamazares y el aparato del PCE -que pretendían una centralización y una reducción de la posible actuación de las corrientes (al aumentar del 10% al 20% el umbral para recoger sus aportaciones y su participación organizada)-, se encontraron desde el comienzo con fuertes resistencias, superadas solamente gracias al extraño procedimiento de hacer votar en bloque todas las tesis en el Consejo Político Federal.

El objetivo de la dirección de IU era utilizar la Asamblea como una plataforma de relanzamiento cara a las elecciones generales de marzo del 2004, que mostrase una organización unida detrás de su candidato, con un proyecto de lucha contra el PP para la constitución de un gobierno de la izquierda plural en el Estado y capaz de recuperar el diálogo con sindicatos y movimientos sociales para lanzar una política de alianzas más amplia hacia otras fuerzas de la izquierda. Para resumir, su modelo era ICV y la transformación “ecosocialista” de la tradición del PSUC que Saura había llevado a cabo en Catalunya hasta su participación en el gobierno tripartito de izquierdas. Los temas conflictivos, donde existen diferencias reales, como la cuestión nacional, la posición ante un posible referéndum sobre el proyecto de Constitución europea, la política de concertación social con el PP de las direcciones de CC OO y UGT o el balance del funcionamiento interno de IU, debían quedar aplazados y, en la medida de lo posible, salir de la agenda.

Este escenario idílico se complicó mucho con la crisis abierta de la principal federación de IU, Andalucía, por el reglamento de elección de delegados, detrás del que se encontraba la posición a adoptar en las elecciones autonómicas de marzo. La dirección de IU-CA, controlada por Alcaraz y el aparato del PCA, se negó a aplicar el reglamento decidido para el resto del Estado, que combinaba número de militantes con número de votos obtenidos (para corregir unos censos que se consideraban cuanto menos dudosos). La elección de delegados en Andalucía se atendería solo al número de militantes, porque la otra fórmula bien podía dar la mayoría al “sector crítico” (que había obtenido hasta el 42% de los votos en IU-CA), que agrupaba desde la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, hasta la CUT, pasando por un importante sector “anguitista” en plena evolución. Lo que se estaba reproduciendo en la federación andaluza era la misma crisis que había agrupado entorno a Llamazares a los defensores de una IU no hegemonizada por el aparato del PCE en la VI Asamblea, más allá de otras diferencias políticas. Ahora la cuestión en liza era como se designaba al candidato de IU-CA para las elecciones andaluzas y el rechazo de la designación de Valderas por el aparato del PCA. A pesar de sus diferencias internas, el “sector crítico” andaluz construyó su unidad en un doble pacto de apoyo cara a la VII Asamblea y la designación de candidato en las elecciones andaluzas entre la corriente “anguitista” de Convocatoria por Andalucía y la CUT, que hasta ese momento había formado parte de la Corriente Roja (aunque empezaba a definir un proyecto propio).

El “sector crítico” andaluz, confiado en el apoyo que una parte importante había prestado a Llamazares en la VI Asamblea, pidió su mediación para que se aplicara el reglamento de elección de delegados decidido en el Consejo Político Federal. El equipo de Llamazares prometió su intervención pero se encontró con la oposición

cerrada del aparato del PCA y del PCE, que exigieron manos libres en Andalucía si Llamazares quería mantener lo que ya se llamaba la “nueva mayoría” y una lista unitaria. Y el chantaje fue efectivo porque la otra alternativa implicaba la voladura no ya del escenario idílico preparado para la VII Asamblea, sino volver a hundir a IU, a tres meses de las elecciones generales, en una lucha fraccional que el sector de Llamazares podía perfectamente perder. El precio que pago fue perder a lo que había sido hasta entonces el ala izquierda de su propio bloque de alianzas desde la VI Asamblea.

El desarrollo entre bambalinas de la VII Asamblea estaría en gran parte dominado por la crisis andaluza y su proyección al resto de IU, reduciendo las posibilidades de un debate político profundo más amplio al agotar gran parte de las energías en la lucha fraccional que llevaría a la presentación de tres listas: la de la “nueva mayoría”, la de la Corriente Alternativa y la de la CUT-Rojos. Muy poco ayudó al debate, en este clima de polarización previa, la proyección el primer día de Asamblea de un video sobre la historia de IU en el que había desaparecido por encanto Julio Anguita y el período de IU bajo su dirección, mientras que se subrayaba la continuidad de IU con el PCE, en especial la contribución de Carrillo (presente como invitado en la sala) al pacto constitucional que instauró el régimen monárquico tras el franquismo. Los intentos del propio Llamazares por compensar esta escenificación de los peores temores de un amplio sector de IU proveniente de otras tradiciones (a los que también contribuyeron los saludos de rigor de los PCs post-estalinistas de medio mundo) y centrar por fin el debate sobre la cuestión esencial de cómo preparar a IU para la lucha contra el PP, tuvieron solo un éxito relativo. A pesar de ello, el Informe Político fue aprobado por 434 votos a favor, 94 en contra y 72 abstenciones. (Otros 177 delegados acreditados no estaban en la sala y otros 103 delegados elegidos simplemente no se presentaron en la Asamblea).

Las reuniones de las comisiones pusieron de manifiesto que la “nueva mayoría” podía no ser tal ni en los temas organizativos ni los estatutarios. La dirección propuso posponer la decisión final sobre las tesis a una Conferencia de Organización en otoño del 2004, una vez finalizada la temporada electoral. A pesar de los esfuerzos por recoger enmiendas en las Tesis políticas, sobre todo en relación con la Constitución europea, la desconfianza y la polarización eran tales que la enmienda presentada por la federación de Valencia -que en buena parte había recogido ya la ponencia- fue mantenida y obtuvo cerca del 34% de los votos de los delegados presentes, como una manera de garantizar que la prevista Conferencia sobre temas europeos tendría lugar antes de junio y que la crítica al texto de la Constitución europea se podía convertir en un No en caso de referéndum. Este sería el mejor resultado que obtendrían los sectores críticos en la Asamblea y puso de manifiesto la posibilidad de influir sobre la orientación general de IU si se estructuraba una corriente de izquierdas plural y no sectaria, capaz de mantener un diálogo con el sector Llamazares.

Finalmente, la lista de la “nueva mayoría” –que aglutinaba al sector Llamazares, al aparato del PCE, a las mayorías de EB y EUiA, a una minoría del “sector crítico” andaluz, así como a una parte de la Plataforma de Izquierdas- obtendría el 76,5% de los votos. La Corriente Alternativa –que contó con el sector “anguitista” andaluz, la Plataforma de Izquierdas de Madrid y Espacio Alternativo-, el 13,8%. Y la lista de la CUT con la Corriente Roja, el 9,6% (después de que la Asamblea aceptase someter a votación la lista, aunque no había recogido los avales suficientes).

Los “caracoles” ibéricos como alternativa al PP

A pesar de todo lo anterior, la VII Asamblea de IU debe ser juzgada sobre todo por la cuestión esencial de si fue capaz o no de ofrecer una alternativa de izquierdas al Gobierno del PP, porque esa es la cuestión central de la vida política en el Estado español. Y si bien el debate entre mayorías y minorías, entendido como un cruce de argumentos, fue muy limitado, no quiere decir que no hubiera una exposición clara de cual es el proyecto en este sentido de Llamazares tanto en el Informe Político como en la presentación de la lista de la “nueva mayoría”, por un lado y de la posición de la Corriente Alternativa y de la CUT-Rojos en sus textos, por otra.

En una entrevista a El País después de la Asamblea, Llamazares resumía su posición así: “Frente al monolitismo y la deriva ultraconservadora de la derecha, se esta produciendo una alternativa nucleada en torno a la izquierda plural, donde hay nacionalistas y ecologistas. Eso se ve en muchas comunidades autónomas. En la mayoría sino fuera por el traspies de Madrid. El bipartidismo no será ya la alternativa al PP. La única que hay ahora pasa por la izquierda plural. Además creo que nosotros y el PSOE debemos conjugar el hecho social con el hecho federal” /5. En el Informe Político -tras caracterizar el nuevo ciclo de movilizaciones que ha permitido que IU se convierta en una referencia de esa alternativa al PP, a pesar de su 6,5% de votos-, se establece como mediación entre la movilización y la construcción de esa alternativa estatal de la izquierda plural, “ampliar el perfil de lo que la ciudadanía reconoce como específico de la acción del gobierno de IU”. Es decir, la experiencia de la política de alianzas y la participación en los gobiernos autonómicos de Baleares, Aragón, Asturias, Euskadi y Catalunya, así como de gobiernos municipales, “con Cordoba como bandera”.

Esta estrategia intenta dar respuesta al problema de cómo acumular fuerzas en el nuevo ciclo de protestas para levantar una alternativa al PP, dando una salida política parcial al movimiento con los gobiernos autonómicos de la izquierda plural. La propia participación en ellos sitúa a IU ante el dilema ineludible de definirse sobre la reforma estatutaria, sin la que no es posible imaginar un aumento significativo del gasto social para hacer una política distinta a la neoliberal del PP y a la socio-liberal del PSOE que le permitan un perfil propio y ser un eje esencial de la alternativa global al PP. Por utilizar el símil de la estrategia zapatista, se trataría, frente al “mal gobierno” neoliberal del PP, de crear una red de “caracoles” ibéricos que puedan hacer la experiencia de un “buen gobierno” capaz de satisfacer necesidades inmediatas de la población.

Los peligros de esta estrategia son muchos. IU es una fuerza minoritaria en todos los gobiernos autonómicos de izquierdas, aunque imprescindible para su propia existencia, lo que explica la contradicción entre poder electoral y poder institucional. Por otra parte, el PSOE es un aliado que esta teñido por una práctica socio-liberal y corrupta de 12 años de gobierno bajo Felipe Gonzalez. Hasta ahora los gobiernos autonómicos de izquierdas se han constituido sobre la base de una caída de voto de la socialdemocracia y la definición de un programa de resistencia frente al PP lleno de ambigüedades. Solo a partir de noviembre del 2003 la combinación del ciclo de movilizaciones, el desafío del Gobierno vasco con el Plan Ibarretxe y la formación del gobierno tripartido de izquierdas catalán han supuesto un cambio de la situación política que permite que exista una alternativa al PP y no una mera alternancia, y por lo tanto un campo de actuación común de esos polos de resistencia institucional.

En el mejor de los escenarios, el PP puede no revalidar su mayoría absoluta en marzo y encontrarse sin aliados suficientes para formar gobierno. El PSOE no obtendría tampoco una mayoría absoluta y se vería obligado a negociar la constitución de un gobierno de izquierda plural con IU y fuerzas nacionalistas. Pero las últimas encuestas sitúan a Rajoy y al PP 10 puntos por encima del PSOE pocos días antes de que se disuelvan las Cortes /6. En el peor de los escenarios, el de una nueva victoria del PP, los gobiernos autonómicos de izquierda plural, si continúa el ciclo de las movilizaciones de protesta contra la política neoliberal, militarista y centralista de la derecha, pueden convertirse en una red de “caracoles” ibéricos que permitan seguir acumulando fuerzas y resistiendo.

Evidentemente, las condiciones para ello son que se mantenga y crezca la movilización social –y por lo tanto que se aliente y no se subordine a ningún acuerdo institucional-; que la base programática de los gobiernos de izquierda combine un giro social con una reforma estatutaria profunda, que inevitablemente implicará una reforma constitucional; que se produzca un cambio en la correlación de fuerzas en el seno de la izquierda a favor de las organizaciones que luchan de manera más decidida por una alternativa; y que los ciudadanos puedan efectivamente experimentar que están mejor gobernados y que participan más activamente en los gobiernos de la izquierda plural. Si no se dan esas condiciones, si los gobiernos de la izquierda plural aplican una gestión socio-liberal bajo la hegemonía del PSOE que no ponga en cuestión el actual modelo territorial que es correa de transmisión de las políticas neoliberales del gobierno central del PP, IU debería romper con ellos y priorizar la recomposición de la movilización, manteniendo la perspectiva de una alternativa al PP que implique abrir una segunda transición.

Las corrientes de izquierdas han sido especialmente críticas de cualquier subordinación de IU al PSOE. Como lo expresaba el manifiesto de la Corriente Alternativa: “Nos esforzaremos por que IU exprese claramente su voluntad de defender un proyecto autónomo anticapitalista que priorice su alianza estratégica con los movimientos sociales y subordine a ese objetivo los acuerdos tácticos con otras fuerzas políticas que puedan ayudar a echar del gobierno al PP de Aznar y Rajoy. Obviamente compartimos la voluntad de luchar contra esa derecha cada vez más beligerante pero también pensamos que sin un reforzamiento de la movilización social y de una izquierda alternativa intransigente en la lucha contra el neoliberalismo y la guerra global, corremos el riesgo de la repetición, esta vez como farsa de etapas de gobiernos PSOE que terminarían facilitando el retorno de la derecha”. Aquí el problema de cómo construir una alternativa frente al peligro de alternancia socio-liberal se sitúa exclusivamente en el terreno de la movilización social sin establecer mediaciones institucionales para la acumulación de fuerzas que no sea el propio crecimiento electoral de la izquierda alternativa. Se dirige a una experiencia social producida en una movilización que, por muy amplia que pueda ser como en el ciclo de luchas que hemos vivido, se limita al sector social más activo. No prevé una experiencia social a través de una forma de gobernar distinta, por limitados que sean inevitablemente sus márgenes de maniobra, como la que ha tenido lugar, por ejemplo, en el gobierno regional de Rio Grande do Sul y en la alcaldía de Porto Alegre en Brasil.

La concreción táctica de esta orientación sería el apoyo en los parlamentos autonómicos y estatal de un gobierno minoritario del PSOE frente a la derecha. La correlación de fuerzas para IU es mejor en estas instancias institucionales que en el seno de los gobiernos y la autonomía de su acción política le pondría a salvo de la

erosión electoral por la aplicación de políticas socio-liberales o centralistas, permitiéndole la resistencia en la movilización. Esta fue, en definitiva, la política de Rifondazione Comunista frente al gobierno Prodi en Italia /7.

Existe sin duda una experiencia social acumulada tras el largo período de gobiernos socio-liberales del PSOE, junto a debilidad de Zapatero como candidato, que explican que su alternancia bipartidista no sea capaz de recuperar por si mismo una mayoría electoral de izquierdas. La resistencia social en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha se expresa ante todo contra el mal gobierno, y en algunos casos corrupción, de los gobiernos autonómicos del PSOE. En la coyuntura política anterior –desde mayo del 2001 con las elecciones vascas hasta las elecciones catalanas en noviembre del 2003- una política de sostener al PSOE, “como la cuerda sostiene al ahorcado” por utilizar la vieja formula leninista, era la más prudente para la izquierda alternativa. Pero en la nueva situación resulta incomprensible para la inmensa mayoría de los votantes y militantes de IU y se ha convertido además en una mera formula propagandística negativa porque la mayoría de IU y sus votantes quieren hacer la experiencia de “gobernar contra el PP” sin que les parezca contradictorio con continuar las movilizaciones.

Un primer balance tras la VII Asamblea

IU sale de su VII Asamblea con una línea política, que es la del sector Llamazares, condicionada por su fraccionalismo político interno. Ninguna de las tres corrientes tiene consistencia interna y se trata de pactos y acuerdos en gran parte de circunstancias, dictados por el propio conflicto fraccional. Ello no quiere decir, como hemos visto, que no haya diferencias políticas importantes, pero tienen en buena medida un carácter transversal a todas las corrientes. Y algunas federaciones, como EB y EUiA, han salido fortalecidas, aumentando en general el peso de las federaciones en la vida interna de IU, que antes estaba monopolizada por las corrientes.

La línea política de Llamazares tiene ambigüedades que son resultado de una opción consciente por mantener equilibrios internos y situarse en la alternativa política tal y como viene definida por la actual situación. Otras son inherentes a una estrategia de reformas fuertes –como es el programa de IU- pero en la que la cuestión de una ruptura se desliza al limbo del programa máximo republicano y socialista. Este segundo tipo de ambigüedades minan la confianza de los sectores más a la izquierda en IU y se concentran hoy no tanto en la respuesta táctica inmediata ante la cuestión vasca o catalana, el contenido del proyecto de la Constitución europea o las alianzas con el PNV, ERC o el PSOE, sino en la actitud frente al derecho de libre decisión de vascos y catalanes para la reforma de sus estatutos -incluido el derecho de autodeterminación-, el tipo de voto en un posible referéndum sobre la Constitución europea neoliberal o el acatamiento del marco constitucional monárquico. Es decir, sobre cuestiones de principio que son fundamentales para una estrategia socialista.

Esta ambigüedad es inevitable y hunde sus raíces en la naturaleza de IU, que nació como una coalición con un programa de acción de reformas fuertes, con una aspiración anticapitalista y republicana, pero no como un partido revolucionario. Era la respuesta de los naufragios de la izquierda post-franquista a una situación no revolucionaria de institucionalización del régimen monárquico para reagruparse y reemprender la lucha, cuyo contenido y alcance solo la propia movilización social en el contexto estatal, europeo e internacional, puede definir.

Por eso es fundamental como tarea estratégica, no solo construir una IU lo más fuerte posible como eje de una alternativa al PP distinta y autónoma del social-liberalismo bipartidista del PSOE. Sino también agrupar en su seno una corriente de izquierdas transversal, amplia y plural, capaz de defender día a día su programa máximo socialista y republicano, estableciendo un puente con la actividad de reformas fuertes institucionales y la movilización social. Pero tiene que ser una Corriente de Izquierdas en continua interacción con la dirección de IU y sus militantes y votantes, no una vanguardia autoproclamada que se limite a una política de emplazamientos y a subordinar la construcción de IU en los movimientos sociales a su reforzamiento directo como organización fuera de IU. Es más, la estabilidad y la capacidad estratégica de una corriente de izquierdas de estas características, capaz de establecer sinergias a nivel estatal entre los muy diversos procesos de recomposición de la izquierda alternativa y anticapitalista en un estado en el que la cuestión nacional es determinante, solo podrá asegurarse a su vez si el núcleo marxista y revolucionario constituye su propia organización estatal y emprende la larga e ingrata tarea de comenzar a construir una dirección revolucionaria en una situación no revolucionaria, definiendo los elementos de una estrategia de ruptura.

En definitiva estas son las tres tareas organizativas que se desprenden de los tres retos centrales de la izquierda alternativa: derrotar al PP; condicionar mediante el programa y la movilización los gobiernos de izquierda plural para derrotar las políticas del neoliberalismo militarista y centralista; y comenzar a preparar al mismo tiempo los elementos imprescindibles para una ruptura republicana y socialista. Es en relación con estas tres tareas y estos tres retos que habrá que juzgar en el próximo período a todas las fuerzas que hoy componen Izquierda Unida.

1/ Jaime Pastor, “VI Asamblea Federal de IU: la crisis sigue abierta”, Viento Sur n 53, noviembre del 2000.

2/ Julio Setien, “XVI Congreso del PCE, ni medio lleno ni medio vacío”, Viento Sur n 61, abril del 2002.

3/ La difícil gestión de este espacio político sin consolidar es evidente y los errores inevitables en parte. Hay que destacar que la Corriente Roja y un sector del “anguitismo”, con el propio Anguita a la cabeza, intentaron presionar por la izquierda a la dirección de IU cara a la VII Asamblea, y construir así su propio perfil político, organizando rápidamente una campaña por la III República, que consiguió reunir en una manifestación en Madrid a un par de miles de personas.

4/ La página web de IU (www.izquierda-unida.es) recoge todos los documentos de la VII Asamblea, tanto los oficiales como los de las corrientes. Los textos del Espacio Alternativo pueden consultarse además en su página xxxx, y los de la Corriente Roja en (www.nodo50.org/corrienteroja). Otras aportaciones aparecieron en Rebelión (www.rebellion.org).

5/ Entrevista a Gaspar Llamazares, “La única alternativa al PP ahora es la izquierda plural”, El País, 23 de diciembre del 2003.

6/ Sondeo de Sigma Dos, “El PP mantiene 10,7 puntos sobre el PSOE en vísperas de la disolución de las Cortes”, El Mundo, 4 de enero del 2004.

7/ el PRC italiano y la LCR francesa han sido los dos principales referentes de la izquierda alternativa y anticapitalista en el Estado español. Ambas fuerzas simbolizan la opción por una alternativa anticapitalista frente a la experiencia de los gobiernos socio-liberales europeos que, a través de coaliciones en diversas fórmulas de socialdemócratas, comunistas y verdes, han estado al frente de la reestructuración

neoliberal entre 1995, cuando llegaron a ser mayoría en la UE, hasta hoy, cuyo principal exponente se limita al Gobierno alemán (dejando aparte la “tercera vía del neolaborismo de Blair que, por su política, resulta difícil incluir en este espacio socio-liberal).

Para un sector de las corrientes críticas de IU, la experiencia de la “izquierda plural” socioliberal francesa, que acabó con su completa derrota y la polarización en las últimas presidenciales entre Chirac y Le Pen, hace que rechacen por cuestión casi de principio cualquier gobierno de coalición de izquierdas, incluso la misma denominación de “izquierda plural”, porque solo podría operar en los límites marcados por el neoliberalismo estatal e internacional. Se obvia que no se trata de un problema de programas solo, sino cómo esos programas responden a la experiencia social y a la conciencia de los ciudadanos. Tres debates son ilustrativos a este respecto: el debate de la izquierda del PT brasileño tras la formación del gobierno Lula, el debate en el PRC italiano desde junio del 2003 tras el referéndum por la ampliación de los derechos laborales, y los debates en el reciente congreso de la LCR francesa que desembocó en la alianza con Lutte ouvriere para las elecciones regionales de marzo del 2004.

Estos tres debates fundamentales no deberían trasladarse artificialmente a la situación del Estado español –que exige un debate propio específico en el que la cuestión nacional es determinante- entre otras razones porque todas estas tácticas, lejos de ser meramente propagandistas, están en buena parte condicionadas y son posibles por el peso y las características de los sujetos instrumentales que las aplican. En el Estado español no existen partidos revolucionarios como la LCR o el PRC. Por no existir no hay ni corrientes de izquierdas estructuradas como la DS, el MES o la CST en el PT brasileiro. Lo que existe es IU y las fracciones que lo pueblan, producto de una larga crisis organizativa y política aun sin resolver y que además han perdido toda referencia sindical de izquierdas, con la excepción quizás de una parte de IU con el “sector crítico” de CC OO y la pequeña CGT.